



RAMA JUDICIAL  
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	CONFLICTO DE COMPETENCIA-EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A
DEMANDADO	INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION S.A.S.
CONFLICTO SUSCITADO	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado y Juzgado Octavo Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Medellín.
RADICADO	05001-41-05-008-2022-00475-00
TEMAS Y SUBTEMAS	CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
DECISIÓN	DIRIME CONFLICTO

AUTO INTERLOCUTORIO No. 010

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta No. 058 de 2022, procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado y Juzgado Octavo Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Medellín, con ocasión del PROCESO EJECUTIVO LABORAL formulado por la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** en contra de **INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTIONS S.A.S.**

ANTECEDENTES

La **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** promovió PROCESO EJECUTIVO LABORAL en contra de la sociedad **INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTIONS S.A.S.**, , tendiente a que se libre orden de pago por: *i*) la suma de **\$9.230.658** por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en pensión obligatoria y *ii*) la suma de **\$1.305.900** por concepto de intereses de mora causados y no pagados hasta el 16 de mayo de 2022, *iii*) los intereses de mora que se causen a partir de la fecha del requerimiento (prejurídico), hasta el pago efectivo de las deudas, y por las costas y agencias en derecho (f. 1 a 7 Archivo 02 ED).

El asunto correspondió por reparto al **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO**, dependencia judicial que a través de Auto Interlocutorio No. 444 del 09 de junio de 2022 declaró la falta de competencia para conocer del presente asunto, tras considerar que esta se atribuye a los **JUECES MUNICIPALES DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN**. Dicha decisión la sustentó, según se observa, en providencias de la Sala de Casación Laboral de la CSJ como los autos AL228-2021, A4167-2019 y AL1046-2020 considerando que, al pretender el pago de aportes a seguridad social, la competencia radica en el juez del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social o el de aquel donde se emitió el documento de cobro, aspectos en virtud de los cuales, resaltó, la entidad ejecutante tiene su domicilio en esta ciudad. Seguidamente, expuso que tampoco se cumple lo referido al segundo presupuesto, por cuanto el requerimiento previo efectuado a la ejecutada fue realizado en Medellín (f. 1 a 3 Archivo 03 ED).

Asignado el proceso al **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN**, en Auto del 22 de septiembre de 2022, expresó, respecto de las motivaciones del Juzgado laboral del Circuito de Envigado, no compartir la interpretación que este hizo de la premisa normativa y jurisprudencial aplicable al caso en particular.

Lo anterior, basado en que, al tenor de lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2940-2019, el Juzgado remisor se declaró incompetente por que la demandante tiene su domicilio en Medellín, y en dicha ciudad se hicieron los requerimientos por mora, pasando por alto que el Título Ejecutivo No. 13784-22 fue expedido en el Municipio de Sabaneta que pertenece al Circuito de Envigado, razón por la que, de conformidad con el artículo 110 CPLSS, y lo señalado por la Jurisprudencia, el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO** si tiene competencia para asumir el conocimiento del asunto, teniendo en cuenta que, en los términos de la norma indicada, la competencia estaría dada por el lugar del domicilio de la AFP o el lugar en el que se expidió el título ejecutivo para el cobro, y no por el lugar en el que se efectuó el procedimiento previo para recaudar los aportes, toda vez que este último criterio no se encuentra consagrado en la norma y, en los términos del auto.

A partir de tales argumentos, rechazó de plano el proceso por falta de competencia territorial, y suscitó el conflicto negativo de competencia, disponiendo la remisión del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial para dirimirlo (f.1 a 5 Archivo 8 ED).

Allegadas las diligencias a esta Corporación para dirimir el conflicto planteado, se procede a decidir previas las siguientes,

### CONSIDERACIONES

De conformidad con lo consagrado en el numeral 5° del artículo 15 del CPT y de la SS, luego de la modificación introducida por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, las Sala Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, conocen *“De los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial”*.

En cuanto al trámite a seguir en aquellos eventos en los que un Juez decida declarar su falta de competencia para conocer un asunto, el artículo 139 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral por remisión directa autorizada en el artículo 1° de la misma codificación, precisa lo siguiente:

*“ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que*

*reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.*

*El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.*

***El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.***

*El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.*

*Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.*

*La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.” (Negrillas de la Sala)*

Ahora bien, es necesario indicar que más allá de la regla de orden superior trazada por la normativa en cita, la colisión confronta por un lado a un Juzgado Laboral del Circuito de Envigado y de otro, un Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, circunstancia que a simple vista llevaría a pensar, en virtud de la categoría de cada una de estas dependencias, que el Juzgado de menor rango no estaría en la posibilidad de repeler la competencia por provenir el asunto de un Despacho de categoría superior.

Empero, resulta importante anotar que, desde la esquematización y competencia de la Rama Judicial planteada en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 4° de la Ley, establece en su parágrafo 1° que:

*“(…) La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local. (…)”*

Luego, en lo referente al concepto de superioridad funcional de los **Juzgados Laborales del Circuito sobre los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales**, la Corte Constitucional a través de la sentencia C- 424 del 8 de junio del 2015, dejó plasmada tal condición, en los siguientes términos:

*“(…) Constatada la vulneración del derecho a la igualdad y la disminución de las garantías procesales, la disposición acusada es exequible en el entendido que también serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario. Dicha remisión se efectuará así: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y; (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación” (negrilla fuera de texto).*

Bajo esa idea, al conjugar el precedente en materia funcionalidad y el esquema de la administración de justicia, emerge con claridad que no estamos ante un típico conflicto de competencia propuesto por un Juzgado de jerarquía inferior en relación con la dependencia que remitió el proceso por competencia inicialmente, toda vez que, el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO**, pese a ostentar un margen de autoridad más amplio, no es superior funcional del **JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN**, ello en razón a que, no obstante pertenecer al mismo Distrito Judicial de Medellín, ambos ejercen jurisdicción en **Circuitos Judiciales diferentes** (Envigado y Medellín, respectivamente), motivo por el cual, el superior funcional inmediato del Juzgado Municipal implicado sería, conforme los presupuestos anotados, los Juzgados Laborales del Circuito **de Medellín**.

Superado lo anterior, se adentrará la Sala a definir a cuál de los Juzgados enfrentados corresponde la competencia del asunto.

Pues bien, como se dijo desde los antecedentes facticos y procesales, la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** acudió a la vía judicial pretendiendo el cobro compulsivo de los aportes pensionales adeudados por **INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION S.A.S.** en su condición de empleadora, junto a los intereses moratorios generados de la omisión respectiva (f. f. 1 a 7 Archivo 02 ED).

Dicho proceso es adelantado en virtud de la competencia de recaudo forzoso concedida a las administradoras pensionales desde el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que consagra precisamente para estas la obligación de ejercer acciones de cobro frente a los patronos incumplidos.

En este escenario, la misma Jurisprudencia ha reconocido el vacío legal existente en torno a la competencia de los Jueces de cara a las ejecuciones que por aportes parafiscales adelanten las entidades del sistema de seguridad social, puntualmente los fondos privados de pensiones; no obstante, ha aceptado en estos casos la aplicabilidad, por integración normativa, del contenido del artículo 110 CPLSS que establece: “(...) *De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946, conocerán los ~~jueces del trabajo~~ <jueces laborales del circuito> del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo que hubiere proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón o cuantía. (...)*”.

Lo anterior, en atención a que, en esencia, el precepto legal citado reglamenta un trámite direccionado al mismo punto, esto es, lograr el pago de las cuotas o aportes pensionales adeudados, estableciendo, en lo que interesa a esta decisión, dos (2) supuestos para asignar competencia, a saber: **1) El Juez del domicilio de la entidad de seguridad social, o, 2) la Seccional en donde se hubiere proferido la resolución o el título ejecutivo que sirve de fundamento al cobro de lo adeudado.**

Así lo ha recabado la Sala de Casación Laboral de la CSJ en decisiones como el Auto AL3363-2022 en el que rememoró lo señalado en providencias como AL2940 – 2019, reiterada en proveídos AL4167-2019, AL1046-2020 y AL398-2021 en donde dijo:

*“(...) En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza,*

es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

(...)

Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto. (...)”

Bajo el panorama descrito, destaca la Sala que, según el certificado de existencia y representación de **PROTECCIÓN S.A.**, el domicilio de la entidad es en la ciudad de Medellín (f. 32 a 93 Archivo 02 ED). Luego, en lo relacionado con la gestión de cobranza adelantada por aquella, obra mencionar que, lo relevante no es el sitio de origen del *requerimiento*, como al parecer lo entendió el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO**, sino el *lugar de expedición del Título Ejecutivo* No. 13784 - 22, adosado en el expediente a folio 08 Archivo 02 ED, que lo fue, según el contenido del propio documento en el municipio de Sabaneta, que hace parte del circuito de Envigado.

<div>Protección</div> <div>Pensiones y Cesantías</div> <div>Título Ejecutivo No. 13784 - 22</div> <div>La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. con Nit. No. 800.138.188-1 procede a LIQUIDAR las Cotizaciones Obligatorias adeudadas al Sistema General de Pensiones para los Fondos de Pensión Obligatoria que Administra, por el aportante, así:</div>	
NOMBRE DEL APORTANTE	INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION SAS
IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE	NIT 900545354
TOTAL ADEUDADO	\$ 10.536.558,00
CAPITAL ADEUDADO a la fecha del periodo de corte del Requerimiento	\$ 9.230.658,00
INTERESES DE MORA ADEUDADOS	\$ 1.305.900,00
Intereses liquidados a la fecha:	16/05/2022
Periodo de CORTE del Requerimiento en mora	02/2022
Lugar y Fecha de Expedición del Título Ejecutivo	SABANETA, 19 de mayo de 2022

De ahí que, surgía para la accionante lo comúnmente denominado como el fuero electivo, pues estaba para él, abierta la posibilidad de incoar la acción ejecutiva ante los jueces laborales de Medellín, ciudad de domicilio de la entidad, o ante el Juez Laboral de Envigado, que se reitera comprende al municipio de Sabaneta en su circuito, y lugar de expedición del título, sitio en el que finalmente decidió promover la actual controversia, siendo entonces el **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO** el llamado a conocer del asunto, disponiéndose la remisión de las diligencias para que adelante el trámite respectivo.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA LABORAL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** que la competencia para surtir el trámite de la demanda EJECUTIVA instaurada por **PROTECCIÓN S.A.** en contra de **INTEGRAL SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION S.A.S**, corresponde al **JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO**.

**SEGUNDO: REMITIR** el expediente al despacho competente y comunicar esta decisión al **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN**, acompañando copia de la presente decisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Los Magistrados,

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrado

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 197 del 01  
de noviembre de 2022

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>